

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501420190032401
Proceso:	Ordinario
Demandante:	ÁNGELA ROSA DIAZ MAJEROS
Demandado:	EPM S.A. ESP, PROTECCIÓN S.A., AFP PORVENIR S.A.
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	05 DE AGOSTO DE 2022
Decisión:	CONFIRMA. MODIFICA Y ADICIONA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 08 DE AGOSTO DE 2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cinco (5) de agosto de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	ANGELA ROSA DIAZ MAJERUS
DEMANDADAS	COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S. A
ORIGEN	Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-014-2019-00324-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ANGELA ROSA DIAZ MAJERUS contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.

Atendiendo al poder remitido vía correo electrónico el 18 de julio de 2022¹ , se reconoce personería para representar los intereses de PORVENIR S.A. a la abogada Paula Andrea Arboleda Villa con CC 1.152.201.387 y portadora de la TP 270.475 del C.S. de la J., quien funge como apoderada inscrita en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S., identificada con NIT 830515294-0 a quien le fue conferido poder a través de escritura pública N°1323 del 11 de mayo de 2022 de la Notaría 18 del Círculo de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda²

La señora Angela Rosa Diaz Majerus formula demanda contra Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A.. pretendiendo se declare: **i)** la ineficacia de su traslado al régimen de Ahorro Individual con solidaridad -RAIS y que se encuentra válidamente afiliada a Colpensiones, conservando los beneficios del Régimen de Prima Media -RPM-; y en consecuencia, de lo anterior se condene a **ii)** Porvenir S.A. a devolver a Colpensiones la totalidad de los aportes de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluidos los

¹Carpeta 02SegundaInstancia, archivo 03AlegatosPorvenir.pdf

² Carpeta 01Primera Instancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Pág. 4/13

intereses y rendimientos financieros; **iii)** Costas y agencias en derecho a cargo de las demandadas y por ultimo **iv)** Lo ultra y extra petita.

Fundamentó sus pretensiones en que en el mes de diciembre de 1997 se afilió a la AFP Colpatria, después Horizonte por absorción y luego Porvenir S.A. por absorción. Posteriormente, en el mes de noviembre de 1998 se trasladó a Protección S.A., sin que previamente a la suscripción de dichos actos, le fueran advertidas las ventajas y riesgos que acarrearía para ella suscribir el traslado de régimen pensional en virtud del deber del buen consejo, no se le realizó una evaluación de su situación pensional, teniendo en cuenta los distintos IBL en ambos regímenes, entre otros. Según proyección pensional, en el RPM la prestación sería por la suma de \$1.371.649, mientras que en el RAIS sería por la suma de \$828.116.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

i) Colpensiones³

No se han demostrado las razones de hecho y de derecho para que la entidad hubiese accedido a declarar la nulidad del traslado de la demandante al RAIS, y menos, para realizarle ningún estudio pensional, al no encontrarse actualmente afiliada a Colpensiones. Indica que, para obtener el derecho pretendido, es necesario demostrar en forma plena los hechos en que se funda la petición, obteniendo en el caso contrario, un resultado adverso a sus intereses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 167 del CGP y 1757 del CC, aplicables en materia laboral en razón del principio de la integración de normas de que trata el artículo 145 del CPLSS. Excepcionó: improcedencia de la ineficacia y/o nulidad de traslado del régimen pensional, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por pasiva, devolución de cuotas de administración, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, y la que llamó “genérica”.

ii) protección S.A.⁴

El acto de afiliación existe, es válido y exento de vicios, se realizó atendiendo los lineamientos legales vigentes para la época en que se suscribió el formulario de afiliación, donde la afiliada manifestó su voluntad de pertenecer al RAIS al plasmar allí su firma, previa asesoría brindada de manera completa, clara y comprensible sobre las características del régimen; generando derechos y obligaciones para ambas partes; además de que la demandante se encuentra dentro de la limitante que consagra el literal e) del artículo 12 de la Ley 100 de 1993, que fue modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. Adicionalmente alega que, no hay lugar a que se condene a protección S.A. a devolver sumas con todos sus frutos e intereses, pues la AFP, no es poseedor de los

³ Carpeta 01Primera Instancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Págs. 69/77

⁴ Carpeta 01Primera Instancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Págs. 96/115

dineros que se encuentran en la cuenta de ahorro individual que administra, por lo que no es posible dar aplicación a los artículos 1746 y 963 del Código Civil. Finalmente, en el caso de ser condenada Protección S.A. a trasladar los aportes de la demandante, indica que no es posible que se ordene a trasladar concepto diferente al dinero que se encuentra en la cuenta de ahorro individual de la actora, mas los respectivos rendimientos, toda vez que la AFP no es poseedor ni de buena o mala fe de dichos dineros; frente al concepto de pago al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, aduce que tampoco puede devolverse, dado que estos dineros son utilizados por terceros que no cumplieron con los requisitos mínimos para generar el derecho a la pensión en el RAIS.

Excepcionó: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, Inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, prescripción, innominada o genérica.

iii) Porvenir S.A.⁵

El traslado de régimen efectuado por la parte actora se dio en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la fecha, efectuándose además la debida asesoría, en virtud de la cual se consolidó la voluntad de la demandante, de ello da cuenta su firma en el correspondiente formulario de traslado, el cual era el único requisito en ese momento para realizar la afiliación. Excepcionó: prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

Sentencia de primera instancia⁶

El 6 de julio de 2021, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia declarando la ineficacia del traslado que realizó la demandante al RAIS a través de Porvenir S.A. y su posterior hacia Protección S.A., última a quien condenó a trasladar hacia Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo los rendimientos que se hubieren causado como si hubiera permanecido en el RPM y las comisiones de administración causadas a partir del 01 de diciembre de 1998 y a Porvenir S.A. a trasladar con destino a Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el valor de las comisiones de administración causadas entre el 01 de enero de 1998 hasta el 30 de noviembre de 1998. También condenó a Colpensiones a reactivar la afiliación de la señora Diaz Majerus al RPM y sin solución de continuidad. Declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por las demandadas. Condenó en costas a Protección S.A. y a Porvenir S.A., fijando agencias en derecho en la suma de \$1.000.000 a cargo de cada una y en favor de la demandante.

⁵ Carpeta 01PrimeraInstancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Págs. 177/

⁶ Carpeta01PrimeraInstancia; Archivo 09. 2019-00324ac ta audiencia.pdf

Para fundamentar lo decidido, el juez de primera instancia acudió al precedente judicial vigente en la materia y señaló que, a las demandadas les correspondía demostrar el cumplimiento de su deber de información en forma eficiente, eficaz, completa, oportuna y comprensible antes de la suscripción del formulario de afiliación, carga probatoria que no satisfizo con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, declarando en consecuencia la ineficacia de traslado de régimen pensional.

Recurso de apelación:

i) Porvenir S.A. Inconforme parcialmente con lo decido en sentencia formuló recurso de apelación deprecando se revoque totalmente la providencia proferida en primera instancia. Argumenta que al momento de la afiliación de la demandante la reglamentación existente para la época, acerca del deber de información no abarcaba tantos aspectos, como lo hace ahora el deber el buen consejo y doble asesoría. Para la data del traslado, se realizaba una asesoría de manera verbal, de conformidad con el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, siendo el soporte documental de la afiliación el formulario mismo. Indica que la obligación del buen consejo y doble asesoría, son obligaciones posteriores que no existían para la época de la afiliación del a demandante con Colpatria hoy Porvenir S.A., por lo que tales obligaciones no se pueden aplicar de manera retroactiva. En caso de que salga adelante la sentencia, solicita se revoque la orden de trasladar los gastos de administración y seguros previsionales, toda vez que, estos fueron trasladados a terceros de buena fe y las funciones de administración fueron necesarias, debido a la excelente gestión de los recursos.

ii) Protección S.A.

Inconforme con lo decidido en la primera instancia, solicitó se revoque parcialmente lo decidido respecto a la orden de trasladar las cuotas de administración. Indica que estos descuentos son legales, exequibles y vigentes que se realizan en ambos regímenes, además manifiesta que estos descuentos no financian la mesada pensional y se depositan en cuentas diferentes de destinación específica y en ningún momento afectan el monto de la mesada pensional. Por otro lado, aduce que, si la consecuencia de la ineficacia del traslado, es entender que la demandante siempre ha estado afiliada al RPM, la condena debería orientarse solo a ordenar el traslado de los aportes, más los rendimientos que estos hubiesen generado en el RPM, en atención a las restituciones mutuas, toda vez que, es bien sabido que los rendimientos que genera el RAIS superan por mucho los que genera el RPM y adicionalmente con la presente condena, Colpensiones está incurriendo en un enriquecimiento sin causa con ocasión a que está recibiendo los rendimientos, fruto de una gestión administrativa que realizó Protección. Finalmente, solicita se aplique la prescripción a los dineros correspondientes a las cuotas de administración, toda vez que la vocación de los mismos no es la de financiamiento de la mesada pensional, por lo que el concepto les es plenamente aplicables y adicionalmente ha transcurrido el tiempo suficiente para que se configure la misma.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Concedido el traslado para alegar de conclusión en esta sede, solo **Porvenir S.A.**⁷ lo recorrió oportunamente, solicitando se revoque en su integridad la sentencia de primera

⁷ 02SegundaInstancia, archivo 03AlegatosPorvenir.pdf

instancia, toda vez que no existen razones fácticas ni jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al RAIS pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley; Porvenir S.A. al momento de realizar el traslado de la parte accionada al Régimen de Ahorro Individual, cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, pues, se le entregó a la parte actora la información del Régimen de Ahorro Individual en diferentes momentos, esto es, de manera verbal en una reunión general y colectiva, otra reunión de forma personal al momento de suscribir el Formulario de Afiliación y finalmente dentro del mismo Formulario, el cual se recuerda es revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sus requisitos se regulan en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994. Aunado a lo anterior, Se recuerda que la prueba documental que extraña el juez de primera instancia en su fallo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte accionante pues, esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, teniendo en cuenta lo anterior, no es cierto que Porvenir S.A. se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite lo solicitado.

En el evento de considerar de dejar en firme la ineficacia de la afiliación, se solicita que no se condene al traslado de los dineros descontados por Gastos de administración, pues las sumas correspondientes a los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica que, se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, destinando así el 10% del IBC a las cuentas de ahorro individual, el 0,5% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS, y el 3% restante a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

Por último, en relación con la condena en costas, indica que Porvenir S.A. siempre obró con buena fe objetiva, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época en la que se dio el traslado de la parte demandante del RPM al RAIS y buscando siempre el beneficio de la parte demandante, por lo que la condena en costas no es procedente ante la ausencia de mala fe de la AFP.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS; de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que

su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones.

Lo anterior, dado que el fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda es el incumplimiento del deber legal de información por parte de las administradoras, lo que al tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

Angela Rosa Diaz Majerus nació el 07 de julio 1961⁸. Inicialmente se afilió al extinto ISS el 16 de septiembre de 1986⁹. El 25 de noviembre de 1997 suscribió traslado con destino a Colpatria hoy Porvenir S. A.¹⁰, el cual se hizo efectivo el 1° de enero de 1998¹¹. El 14 de octubre de 1998 se trasladó hacia Protección S.A.¹², el cual se hizo efectivo el 1° de diciembre de 1998¹³. Para el 16 de agosto de 2019 contaba con 1.215,86 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales 111.43 lo fueron ante el ISS¹⁴. El 03 de abril de 2019, radicó ante Colpensiones¹⁵ solicitud de nulidad o ineficacia de su afiliación al RAIS, la cual fue negada señalando que su traslado se realizó voluntariamente y en ejercicio de su derecho a la libre elección de régimen¹⁶, y por encontrarse dentro de la prohibición legal de ello al estar a diez años de cumplir la edad pensional.

a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS.

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte de la demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

i) Los artículos 48, 53, 335¹⁷ y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1¹⁸, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3° del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656

⁸ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Pág. 34. No se aportó registro civil de nacimiento, pero sí copia de la cédula de ciudadanía de la demandante, que suministra esa información, no controvertida por la pasiva.

⁹ Carpeta 01PrimerInstancia; carpeta EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CC-43046055, Archivo GRP-SCH-HL-66554443332211_1537-20190703102759.PDF

¹⁰ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Pág. 198

¹¹ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Pág. 200 y 129

¹² Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Pág. 128

¹³ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Pág. 200 y 129

¹⁴ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Pág. 133

¹⁵ Carpeta 01PrimerInstancia; carpeta EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CC-43046055, Archivo SAC-COM-AF-2019_4359694-20190403083139.pdf

¹⁶ Carpeta 01PrimerInstancia; carpeta EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CC-43046055, Archivo GEN-RES-CO-2019_4359694-20190408095948.pdf

¹⁷ Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, debido a la función que desempeñan.

¹⁸ Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

de 1994¹⁹; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas²⁰ para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994²¹.

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de *“suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen”*. No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, solo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

¹⁹ Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

²⁰ **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

²¹ Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP, respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre, voluntaria e informada manifestación de voluntad de la afiliada al momento del traslado o que debe desatenderse la línea jurisprudencial en materia de carga probatoria en asuntos como el que nos ocupa, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que el mismo estuviese precedido de la satisfacción del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó a la afiliada, quien, según sus dichos al absolver el interrogatorio de parte, no recibió asesoría previo a suscribir el traslado.

No son admisibles los argumentos expresados por Porvenir S.A., en cuanto a que, al momento del traslado, éste obedeció a una decisión espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley; se satisfizo el deber

de información en los términos exigidos para entonces; situación que tampoco acreditó, limitándose a afirmar que así había ocurrido. El que asevere que han hecho campañas masivas para educar al consumidor financiero y comunicados de prensa informando los cambios normativos o que el deber de información no fue obligatorio si no desde la expedición de la Circular 016 de 2016 o que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones que surgieron en 2010 y 2014, puesto que a la actividad misma de la administradora demandada subyace la obligación desde la creación misma del régimen pensional, de ilustrar suficientemente al potencial sobre las condiciones de ambos regímenes, su funcionamiento y expectativas, de manera que cada persona adopte una decisión informada y consciente sobre su futuro pensional

No pudiéndose aplicar tampoco, a la aquí demandante la regulación de 2010 sobre deber del consumidor financiero, por cuanto su traslado se firmó en 1997 cuando no existía esa disposición, pero sí estaba vigente y se ha consolidado la que ha obligado a las AFP a brindar la información no bastando con la suscripción del formulario de afiliación, por cuanto su uso, no exime, ni avala la omisión de los deberes impuestos por las leyes a las AFP, y por tanto, se reitera, que previo a la suscripción de ese formulario, éstas entidades deben en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones del traslado, como sostuvo la Corte en **sentencia SL 4360 de 2019** Radicado 68852.

Sobre la carga dinámica de la prueba, ha de indicarse que ésta radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: **i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sublite, mediante la prueba documental arribada, se evidencia que Angela Rosa Diaz Majerus nació el 07 de julio 1961²², por lo que, al 01 de abril 1994, cuando inició vigencia

²² Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Pág. 34. No se aportó registro civil de nacimiento, pero sí copia de la cédula de ciudadanía de la demandante, que suministra esa información, no controvertida por la pasiva.

el SGSSP para ella, tenía 32 años de edad y no reunía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, por ende, nunca fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 25 de noviembre de 1997 suscribió traslado con destino a Colpatria hoy Porvenir S. A.²³, el cual se acusa de ineficaz. Posteriormente, el 14 de octubre de 1998 migró hacia la AFP Protección S.A.²⁴, donde se encuentra afiliada actualmente. El 03 de abril de 2019, radicó ante Colpensiones²⁵ solicitud de nulidad o ineficacia de su afiliación al RAIS, la cual fue negada señalando que su traslado se realizó voluntariamente y en ejercicio de su derecho a la libre elección de régimen²⁶, y por encontrarse dentro de la prohibición legal de ello al estar a diez años de cumplir la edad pensional.

Igualmente fue recaudado interrogatorio a la demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su traslado hacia el RAIS, manifestó que no recuerda haberse trasladado a Porvenir S.A., ni haber firmado el formulario de afiliación, toda vez que para ese momento iba a vincularse a trabajar con la Universidad de Antioquia y lo que hizo fue firmar varios documentos que allí le pusieron de presente. En igual medida, aduce lo mismo respecto a su traslado a Protección S.A., que no recuerda haber firmado el formulario de afiliación, que en ningún momento tuvo ningún tipo de asesoría por parte de las dos AFP y que creía que estaba afiliada al ISS.

Porvenir S.A. no aportó elemento de convicción donde se evidencie cual fue la asesoría que dice haber brindado al señor Diaz Majerus, en momento anterior a la suscripción del formulario de afiliación; siendo esta AFP quien se encargó de tramitar el traslado de régimen pensional, es la llamada a demostrar que ese traslado de régimen no se vio afectado en su eficacia al suministrar la información suficiente, clara, y completa a la entonces potencial afiliada, pero se abstuvo de hacerlo.

En este caso, la pasiva no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar al hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en el posible afiliado, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

²³ Carpeta 01PrimeralInstancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Pág. 198

²⁴ Carpeta 01PrimeralInstancia; Archivo 03. 2019-00324EXPEDIENTE DIGITALIZADO.PDF, Pág. 128

²⁵ Carpeta 01PrimeralInstancia; carpeta EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CC-43046055, Archivo SAC-COM-AF-2019_4359694-20190403083139.pdf

²⁶ Carpeta 01PrimeralInstancia; carpeta EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CC-43046055, Archivo GEN-RES-CO-2019_4359694-20190408095948.pdf

Adicionalmente, deviene innecesario analizar las condiciones de afiliación a Protección S.A., pues la ineficacia del traslado de régimen afecta todo traslado entre administradoras que se haya presentado con posterioridad.

De ello no hay elementos de convicción en el plenario distintos del formulario de afiliación en ésta, sobre el cual la AFP Porvenir S.A. adujo que, estando suscrito por la demandante, quien lo hizo de manera libre y voluntaria, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que los actos de la demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, fueren indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar**, pues la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199- 2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**²⁷, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de

²⁷ por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral

permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Protección S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993²⁸ genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como repuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL4360 de 2019**, concluyendo en que: “la sanción impuesta en el artículo 271²⁹ de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”, lo cual, da lugar a garantizar el derecho del accionante a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES y a declarar que ha permanecido afiliada, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación.

b) Consecuencias económicas de la declaratoria de ineficacia

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del régimen de prima media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la

²⁸ **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

²⁹ El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud¹ en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él, como ha dilucidado el precedente jurisprudencial de la H CSJ en SCL., que esta Sala acoge.

Bajo las referidas premisas, se **confirmarán, modificarán y adicionarán** las órdenes impartidas desde la primera instancia a **PROTECCION S.A.-AFP a la que actualmente se encuentra afiliada la actora**-en el sentido que esta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, debe trasladar a COLPENSIONES la **totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que la hoy demandante figuró como afiliada al RAIS.

Porvenir S.A. y Protección S.A. también deben trasladar a la referida AFP del RPM, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras, por ellas descontadas durante el periodo de afiliación de la hoy demandante en cada una de ellas, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni, si el dinero de la afiliada fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, y por no haberse estudiado previamente a la afiliación de la situación particular de la hoy demandante, y no estando demostrado cuáles fueron los argumentos esgrimidos por las AFP para aseverar que cumplieron con los deberes de información que sostienen haberle dado, no es pertinente exonerarlas de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero de la afiliada, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y la demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración de la accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuencialmente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor de la hoy demandante, como anteriormente se explicó.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante las órdenes impartidas en la primera instancia que aquí se confirma.

Pero, retomando el punto, y por las mismas razones expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral³⁰ contenido en sentencias **SL**

³⁰ Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil³⁰,

3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por la AFP del RAIS durante el periodo de afiliación de la hoy demandante en ella, se deben trasladar debidamente **indexadas** y con cargo a sus propios recursos, aspecto en el cual, **se adicionará** la decisión de instancia, con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

En consecuencia, las órdenes impartidas desde la primera instancia, se **CONFIRMARÁN, MODIFICARÁN Y ADICIONARÁN** como se dijo, y se reitera, deberán cumplirse dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con ambas AFPs del RAIS sin trasladar consecuencias negativas a la actora.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A., y PROTECCION S.A., los valores correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el régimen de prima media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

En este sentido se **confirmará, modificará, adicionará** la sentencia conocida en apelación y consulta.

III. EXCEPCIONES

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Protección S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados al demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A. y Protección S.A por haber resultado vencidas en sus recursos, no pudiéndose tener en cuenta criterios distintos de los previstos en el artículo 365 del CGP., para efecto de exonerar de costas como aspira Porvenir en sus alegaciones. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2022 distribuido por partes iguales a cargo de cada, y en favor de la demandante. Lo anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el 6 de julio 2021, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por la señora **ÁNGELA ROSA DIAZ MAJERUS** contra COLPENSIONES PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. **modificándola y adicionándola** en el sentido en que esta última:

Trasladará a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, con destino a fondo del RPM **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante la totalidad del tiempo en que la referida demandante ha figurado como afiliada en el RAIS.

Además, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. trasladarán a Colpensiones los valores descontados a la actora por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima y con cargo a sus propios recursos, trasladarán debidamente indexados el valor de comisiones de administración y primas de seguros descontados en todo el tiempo en que dicha demandante figuró como afiliada en cada una de ellas; adicionalmente PROTECCIÓN S.A. devolverá por los referidos valores por el tiempo de afiliación de la demandante ante ING Santander Pensiones y Cesantías.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de las demandadas del RAIS los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, e incorporar los respectivos aportes pensionales completos en la historia laboral de la demandante como si hubiera permanecido en el RPM.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente (1SMLV) en 2022.

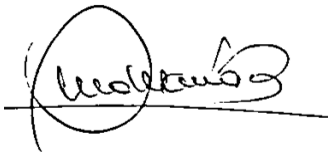
Se ordena notificar por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARIA PATRICIA YEPES GARCIA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
En ausencia justificada